

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **MARÍA NUBIA DEL SOCORRO ZAPATA MOLINA**, contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), proceso al que fue llamado como litisconsorte necesario por pasiva el señor **MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA**, tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-009-2018-00252-01, venido a esta instancia en apelación de la sentencia de primera instancia.

AUTO

De conformidad con la documentación allegada al plenario por el apoderado judicial de COLPENSIONES junto con los alegatos de conclusión de segunda instancia, se reconoce personería al abogado DARÍO MAURICIO TOBÓN CHAMORRO portador de la T.P. 271.442 del C. S. de la Judicatura, para que continúe representando a COLPENSIONES en este proceso como apoderado sustituto.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES:

La actora pretende con la presente demanda que se declare que le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez con fundamento en la Ley 797 de 2003, a partir del 23 de noviembre de 2017, fecha de cumplimiento del requisito de edad, con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y/o la indexación de las condenas y las costas procesales.

Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, relata la demandante que cuenta con 57 años de edad por haber nacido el 23 de noviembre de 1960.

Dice que fue afiliada al Régimen General de Pensiones desde el 20 de agosto de 1985, contando con 1188 semanas cotizadas al sistema.

Afirma que mediante Resolución SUB 165016 del 17 de agosto de 2017, COLPENSIONES le negó el derecho a la pensión de vejez, por no acreditar los requisitos exigidos en la Ley 797 de 2003.

Expone, que en su historia laboral faltan por reportar un total de 141 semanas que fueron laboradas y válidamente cotizadas al RPM en calidad de trabajadora dependiente del señor MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA, por el periodo comprendido entre el 13 de diciembre de 2004 y el 30 de diciembre de 2008, las cuales no se reportan en el histórico de cotizaciones.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

El *a quo*, despachó de manera favorable las pretensiones de la demanda, ordenando a COLPENSIONES proceder a efectuar la respectiva liquidación del cálculo actuarial frente al periodo de omisión por parte del empleador MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA, desde el ciclo de diciembre del 2004 hasta el ciclo de diciembre de 2008, teniendo como base el SMLMV, para lo cual se le concedió un término máximo de 2 meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, y una vez efectuado dicho cálculo actuarial, notificarlo al señor MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA, para que éste en un término máximo de un mes contado a partir de la notificación del mismo, proceda a su solución y cancelación a COLPENSIONES.

De igual forma, condenó a COLPENSIONES a que una vez efectuado dicho reconocimiento y pago del cálculo actuarial por MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA, procediera a realizar la respectiva imputación de las semanas ya referidas del historial laboral de la demandante y a reconocer la respectiva pensión de vejez a partir del 23 de noviembre del 2017 a razón del salario mínimo legal mensual vigente, incluyendo la mesada adicional, sumas que ordenó indexar.

También condenó en costas procesales al señor MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA, fijando como agencias en derecho el equivalente a 3 SMLMV y a COLPENSIONES le fijó el equivalente de 2 SMLMV.

Para arribar a tal decisión, consideró el *a quo* que en este caso si bien se habían allegado comprobantes de pago por el tiempo durante el cual la señora MARÍA NUBIA DEL SOCORRO ZAPATA MOLINA, no tuvo cotizaciones de su empleador MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA, lo cierto es que dichas autoliquidaciones de los años 2004 a 2008, no daban cuenta del pago del aporte al sistema de pensiones, sino solamente del pago de salud y ARL.

Aunado a lo anterior, indicó que en este caso también se encontraba acreditada la relación laboral, porque el señor MARCO ANTONIO había confesado en el interrogatorio de parte que la demandante había prestado sus servicios de manera continua desde el año 2002 al año 2017, por lo que consideró procedente condenar a dicho empleador a pagar el cálculo actuarial por el periodo que dejó de efectuar cotizaciones al sistema de pensional.

En cuanto al cumplimiento de requisitos para obtener la pensión de vejez, adujo el fallador de primer grado, que, en este caso la demandante acreditaba los presupuestos normativos consagrados en la Ley 797 de 2003, al haber cumplido los 57 años de edad el 23 de noviembre de 2017, y contar con más de 1300 semanas cotizadas, teniendo en cuenta para ello, las 1188 semanas que se reportaban en su historia laboral y las 205.68 semanas que se acreditaban con el cálculo actuarial.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

La sentencia fue apelada por la apoderada de COLPENSIONES, quien sucintamente manifestó estar en desacuerdo con la condena en costas impuestas a la entidad, pues considera que no resultó vencida en juicio, toda vez que sus actuaciones estuvieron ceñidas a la ley, siendo el condenado MARCO ANTONIO el responsable de haber omitido la afiliación y pago de aportes al régimen pensional.

Adicionalmente, solicitó a esta magistratura, adicionar la sentencia en el sentido de determinar que los aportes del cálculo actuarial que debe pagar el empleador, deben incluir todos los intereses moratorios.

4. DE LAS ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, los apoderados de COLPENSIONES y de la DEMANDANTE, presentaron alegatos, anotando resumidamente lo siguiente:

ALEGATOS COLPENSIONES:

“La entidad no se opone a efectuar la liquidación del cálculo actuarial frente al periodo de omisión por parte del empleador MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA, desde el ciclo de diciembre del 2004 hasta el ciclo de diciembre de 2008 sin embargo está supeditada al mismo, puesto que para que se pueda realizar la respectiva imputación de las semanas de la historia laboral de la demandante y a reconocer la respectiva pensión de vejez a partir del 23 de noviembre del 2017

Ahora bien, una vez consultada la historia laboral, con el empleador MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA se evidencia novedad de retiro en el periodo de junio de 2003, ello expone que la vinculación laboral culminó y volvió a comenzar con el mismo empleador hasta el 1 de enero de 2009, aspecto que no refleja responsabilidad alguna para esta entidad acorde a lo antes descrito.

Así las cosas debe tenerse en cuenta honorables Magistrados que en el momento de la decisión de primera instancia, en lo que corresponde con la densidad de semanas exigidas y respecto de la posibilidad de obtener la pensión por tener un mínimo de 1300 semanas de cotización, se evidenció en historia laboral que la parte actora contaba con un total de 1.192,29 semanas, razón por la cual no resultaba posible reconocer una pensión de vejez de conformidad con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

ALEGATOS DE LA DEMANDANTE.

CONSIDERACIÓN INICIAL SOBRE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Con debido y acostumbrado respeto por la Alta Investidura Judicial, Cabe advertir que la competencia del Tribunal como Juez de Segunda Instancia queda circunscrita a los puntos que constituyeron la inconformidad de las partes al sustentar el recurso de alzada interpuesto. De ahí que aquellos aspectos de la sentencia de primera Instancia en relación con los cuales las partes no mostraron desacuerdo no pueden ser modificados o alterados por el Honorable Tribunal, pues ello desbordaría su competencia y desnaturalizaría la razón de ser de la carga legal que incumbe al apelante de sustentar el recurso.

De igual forma, y en consonancia con las condenas y obligados en la sentencia que confiere el derecho prestacional de vejez la demandante señora **MARÍA NUBIA DEL S. ZAPATA MOLINA**, es menester traer a la precisión del Honorable Consejo De Estado, Sobre legitimación en la causa. Sección Tercera, sentencias del 22 de noviembre de 2001, rad. 13356, del 15 de junio de 2000, rad. 10171, del 31 de octubre de 2007, rad. 13.503, del 17 de junio de 2004, MP. María Elena Giraldo Gómez, rad.

76001-23-31-000-1993-009001(14452) y 1 de marzo de 2006, MP. Alíer E. Hernández Enríquez, rad.

13764.

LEGITIMACION EN LA CAUSA - Naturaleza jurídica / LEGITIMACION EN LA CAUSA - Legitimación de hecho y material / LEGITIMACION EN LA CAUSA DE HECHO - Concepto / LEGITIMACION EN LA CAUSA MATERIAL - Concepto.

Clarificado, entonces, en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que la misma no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado, resulta menester señalar, adicionalmente, que se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. Toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante –legitimado en la causa de hecho por activa– y demandado –legitimado en la causa de hecho por pasiva– y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño. En un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra. En consonancia con lo anterior, se ha indicado que la falta de legitimación en la causa no impide al fallador pronunciarse de fondo sobre el petitum de la demanda, comoquiera que la aludida legitimación constituye un elemento de la pretensión y no de la acción, en la medida en que se trata de “... una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada”.

Y, conforme lo anterior, al no haber presentado la entidad demandada **COLPENSIONES** objeción o reparo alguno frente a la condena central de la sentencia; cual es, la **CONDENA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ**; No podría haberlo hecho la Co-demandada **COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA, COOPERAN** (sic); Pues, no está, no se encuentra facultado legítima ni materialmente para intervenir y ejercer los derechos de defensa y de contradicción de quien fue obligado, y no se opuso.

CONSIDERACIONES SOBRE LA EXISTENCIA DE LA OBLIGACION DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSION DE VEJEZ.

Para que se cause el derecho a la pensión de vejez, conforme lo establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, **Régimen de Transición**, concordado con el artículo 12 del decreto 758 de 1990 aprobatorio del acuerdo 049 del mismo año, el cual exige

a los mujeres, haber contado con 35 años o más de edad al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones, tener como mínimo de (55) años y quinientos (500) semanas en los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de la edad mínima ó mil (1.000) semanas cotizadas en cualquier tiempo, Requisitos que cumple plenamente mi poderdante señora **MARIA NUBIA DEL S. ZAPATA MOLINA**.

Así, es menester precisar y ratificar el derecho prestacional, que le asiste a mi poderdante señora **MARIA NUBIA DEL S. ZAPATA MOLINA**, y se ha demostrado durante todas y cada una de las etapas del proceso, igualmente es dable demostrar omisiones o inconsistencias en la apreciación del material probatoriamente y los hechos en que se fundan.

Si bien es cierto el **Honorable Despacho** reconoció la prestación económica de vejez pretendida por mi poderdante señora **MARIA NUBIA DEL S. ZAPATA MOLINA**, también es cierto que supedita la prestación económica que le asiste a la demandante, en el pago de una obligación, que claramente **SE PAGO POR PARTE** del patronal **MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA**;: *“...liquidación del cálculo actuarial frente al periodo de omisión por parte del empleador MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA, desde el ciclo de diciembre del 2004 hasta el ciclo de diciembre de 2008...”*

Periodo de tiempos, desde diciembre del 2004 hasta el diciembre de 2008, que clara e inequívocamente, el empleador señor **MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA** pago en su momento; Y, que, como tal, se acreditó en el acápite de la demanda, en los hechos **CUARTO**, con todos y cada uno las pruebas (30 autoliquidaciones). Así:


CUARTO: De igual forma, presenta la señora **MARIA NUBIA DEL SOCORRO ZAPATA MOLINA** con un total de 33 cotizaciones o su equivalente de 141 semanas laboradas y válidamente cotizadas, al Régimen De Prima Media en calidad de trabajadora dependiente del patronal **MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA** con NIT **0130059185**, entre el periodo 13/12/2004, al 30/12/2008; las cuales, no se reportan en el histórico de semanas cotizadas, antes referido. (*Prueba N.º 4, en 30 folios*)

Obsérvese, por tal, la grave omisión del fallador de primera instancia al excluir las pruebas debidamente recaudadas, y que gozan de la total presunción de veracidad y legalidad; que como tal, no se pueden desconocer, pues se incurriría en grave violación del debido proceso y en vía de hecho, como hacer más gravosa la condición tanto del demandante, como del codemandado señor **Marco Antonio Zuluaga Rivera**; quien igualmente, concurrió al proceso demostrando total voluntad y lealtad

procesal, como el cumplimiento del deber de la seguridad social para con su empleada la demandante señora **MARIA NUBIA DEL S. ZAPATA MOLINA**.

Pruebas, que al momento de acreditar en la demanda se acreditaron como fotocopias; Y, hoy igualmente se ratifican y se arriman, ante el honorable Tribunal Superior De Medellín en su Sala Laboral, para su apreciación, como fotos de los originales, las cuales, si, bien lo considera, el alto tribunal, se acreditaran las mismas en físico a las instalaciones de la secretaria.

Así, igualmente se allega, la prueba sobreviniente y crucial como elemento de convicción; formulario de vinculación al sistema general de seguridad social de la trabajadora **MARIA NUBIA DEL S. ZAPATA MOLINA**, por parte de su patrono el señor **Marco Antonio Zuluaga Rivera**.

 SEGURO SOCIAL Pensiones		FORMULARIO DE VINCULACION O ACTUALIZACION AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		CONSECUTIVO FECHA RADICACION	
FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA MAYUSCULA E IMPRIMENTA Y SIN SALVARE DE LOS RECIUDOS					
DEPENDIENTE <input type="checkbox"/> INDEPENDIENTE <input type="checkbox"/>					
I. DATOS GENERALES DEL AFILIADO O SOLICITANTE No. DE DOCUMENTO TIPO DOC. NUIP C N T E P R DV		SECCIONAL PROMOTOR ORIGINA COMISSO PROMOTOR			
NOMBRES SEXO M F NACIONALIDAD DIRECCION RESIDENCIA MUNICIPIO TELEFONO		PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO REGISTRO MENSAJAL DEPARTAMENTO CODIGO			
II. DATOS DEL EMPLEADOR O ENTIDAD AGRUPADORA No. DE DOCUMENTO TIPO DOC. NUIP C N T E P R DV		RAZON SOCIAL O NOMBRE DIRECCION MUNICIPIO TELEFONO SUCURSAL DEPARTAMENTO PUBLICA PRIVADA			
III. INFORMACION DE BENEFICIARIOS No. DE DOCUMENTO TIPO DOC. NUIP C N T E P R DV		PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES SEXO M F TIPO NOV. INGRESO MODAL. RETIRO No. DE DOCUMENTO TIPO DOC. NUIP C N T E P R DV			
NOMBRES SEXO M F TIPO NOV. INGRESO MODAL. RETIRO No. DE DOCUMENTO TIPO DOC. NUIP C N T E P R DV		PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES SEXO M F TIPO NOV. INGRESO MODAL. RETIRO No. DE DOCUMENTO TIPO DOC. NUIP C N T E P R DV			
NOMBRES SEXO M F TIPO NOV. INGRESO MODAL. RETIRO No. DE DOCUMENTO TIPO DOC. NUIP C N T E P R DV		PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES SEXO M F TIPO NOV. INGRESO MODAL. RETIRO No. DE DOCUMENTO TIPO DOC. NUIP C N T E P R DV			
IV. VINCULACION A PENSIONES ACTUALIZACION AFILIACION PRIMERA VEZ TIPO NOVEDAD TRaslado DE REGIMEN TRaslado DE ENTIDAD DIFERENTE		HA COTIZADO MAS DE 150 SEMANAS A LAS CAJAS OFICINAS COMISSO			
SUBSIDIADO SI NO EL AFILIADO DEBE COTIZAR BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE PENSIONES SI NO		ALICIA REGIMEN TIPO COMISSO			
TABLA CON LA QUE DEBE COTIZAR %		HAGO CONSTAR QUE LA ELECCION DEL REGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA LA HE EFECTUADO EN FORMA LIBRE, ESPONTANEA Y SIN PRESION, MANEJO QUE HE ELECHO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA QUE ADMINISTRE MIS CUOTAS PENSIONALES Y QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERIDADEROS. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS INTERESANTES DEL PRESENCIAL SON USUARIOS EN LA QUE CORRESPONDE A LA INFORMACION QUE ME HA SIDO SUMINISTRADA.			
FIRMA DEL SOLICITANTE APROBACION POR LA SUPERINTENDENCIA BANCAJIA SEGUR PENSIONES No. 3004970-10		NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA AUTORIZADA		FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA AUTORIZADA	

- VINCULADO -

Afiliación que, en gracia de discusión, y en procura de enmendar la eventual inconsistencia en la afiliación de su trabajadora; el señor **Zuluaga Rivera**; amparado en el Decreto Número 1833 De 2016, Artículo 2.2 Por medio del cual: “*se corrigen Cotizaciones erróneas, aportes sin vinculación, afiliaciones simultáneas*”; **presento** solicitud de corrección de historia laboral, ante el fondo de pensiones, el 02 de octubre de 2010.

[illegible]

Presenta, igualmente mi poderdante señora **MARIA NUBIA DEL S. ZAPATA MOLINA**, con una densidad superior de 1.201 semanas.

[illegible]

Igualmente, se observa en el reporte de semanas actualizado (24/08/2022) de la señora **María Nubia Zapata Molina**, un total de 192 días o su equivalente **de 27.42 semanas**, que se presentan como: *“periodo en mora por parte del empleador”*, patronal **Muestra Textil Ltda**; tiempos morosos que obedecen a ciclos del **01/01/1994** hasta el **30/07/1994**. Densidad de tiempos que igualmente el Honorable despacho omitió incluir en la contabilidad de tiempos en la sentencia de primera instancia, referida.

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS ANTERIORES A 1995						
Este reporte contiene el detalle de las semanas cotizadas hasta el 31 de diciembre de 1994.						
[27] Identificación Empleador	[28] Nombre o Razón Social	[29] Ciclo Desde	[30] Ciclo Hasta	[31] Asignación Básica Mensual	[32] Días Rep.	[33] Observación
2012400086	CONF ALLBERTTER	17/05/1990	26/12/1990	\$ 47.370	224	Pago aplicado al periodo declarado
2012404726	ESTAMCOLMUEBLES	20/08/1985	31/12/1985	\$ 14.610	134	Pago aplicado al periodo declarado
2012404726	ESTAMCOLMUEBLES	01/01/1986	31/12/1986	\$ 17.790	365	Pago aplicado al periodo declarado
2012404726	ESTAMCOLMUEBLES	01/01/1987	18/08/1987	\$ 21.420	230	Pago aplicado al periodo declarado
2012404817	CONFECCIONES SAGUI LTDA	25/07/1989	31/12/1989	\$ 39.310	160	Pago aplicado al periodo declarado
2012404817	CONFECCIONES SAGUI LTDA	01/01/1990	28/02/1990	\$ 47.370	59	Pago aplicado al periodo declarado
2012404817	CONFECCIONES SAGUI LTDA	01/03/1990	28/03/1990	\$ 47.370	-28	Periodo en mora por parte del empleador
2012405020	SALTARINES LIMITADA	02/09/1992	31/12/1992	\$ 70.260	121	Pago aplicado al periodo declarado
2012405020	SALTARINES LIMITADA	01/01/1993	18/01/1993	\$ 89.070	18	Pago aplicado al periodo declarado
2018412069	HOTEL EL CAPITOLIO	08/08/1994	30/11/1994	\$ 107.675	115	Pago aplicado al periodo declarado
2018412069	HOTEL EL CAPITOLIO	01/12/1994	31/12/1994	\$ 107.675	31	Pago aplicado al periodo declarado
2018412832	INVERSIONES MANZUR HASBUN	04/07/1991	13/12/1991	\$ 54.630	163	Pago aplicado al periodo declarado
2018412832	INVERSIONES MANZUR HASBUN	24/01/1992	27/08/1992	\$ 70.260	217	Pago aplicado al periodo declarado
2019000015	SERVICIOS UNO A LTDA	11/07/1988	23/12/1988	\$ 30.150	166	Pago aplicado al periodo declarado
2019000015	SERVICIOS UNO A LTDA	11/01/1989	06/02/1989	\$ 39.310	27	Pago aplicado al periodo declarado
2032404529	MARULANDA Y ASOCIADOS LTDA	03/09/1987	31/12/1987	\$ 21.420	120	Pago aplicado al periodo declarado
2032404529	MARULANDA Y ASOCIADOS LTDA	01/01/1988	12/01/1988	\$ 30.150	12	Pago aplicado al periodo declarado
2032405981	MANUFACTURAS AIRES	14/02/1991	08/05/1991	\$ 54.630	84	Pago aplicado al periodo declarado
2032406453	INDUSTRIAS SANTAMARIA SPORT	08/02/1989	01/03/1989	\$ 39.310	22	Pago aplicado al periodo declarado
2032407987	MUESTRA TEXTIL LTDA	22/02/1993	30/11/1993	\$ 89.070	282	Pago aplicado al periodo declarado
2032407987	MUESTRA TEXTIL LTDA	01/12/1993	31/12/1993	\$ 89.070	31	Pago aplicado al periodo declarado
2032407987	MUESTRA TEXTIL LTDA	01/01/1994	28/02/1994	\$ 107.675	-59	Periodo en mora por parte del empleador
2032407987	MUESTRA TEXTIL LTDA	01/03/1994	11/07/1994	\$ 98.700	-133	Periodo en mora por parte del empleador
DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PARTIR DE 1995						

SOBRE LA EXISTENCIA DE LA OBLIGACION DEL PAGO DE LOS INTERESES DE MORA

De igual, mediante este apoderado judicial, la señora **MARIA NUBIA DEL S. ZAPATA MOLINA**, presentó inconformidad con el fallo en mención; pues si bien es cierto, reconoce la pensión de vejez y su correspondiente retroactivo pensional, deniega sobre estos los Intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993.

Razones demás, por las cuales, con todo respeto reitero del **HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR CONFIRMAR los derechos y pretensiones objeto de la demanda inicial y reconocidos por el A-Quo; y modificar parcialmente el fallo conforme lo antes expuesto, desconociendo el tiempo objeto de omisión del 13/12/2004, al 30/12/2008; asimismo los intereses de mora consagrados en el artículo 141 e la ley 100 de 1993.**

5. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:

El problema jurídico a resolver en esta instancia se circunscribe a determinar si COLPENSIONES está obligada a recibir el importe de los aportes pensionales a favor de la demandante que deba pagar el demandado MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA, bajo la modalidad de título pensional o cálculo actuarial, por la relación laboral

que la demandante aduce sostuvo con este empleador entre diciembre del 2004 y diciembre de 2008. Igualmente, de prosperar la anterior pretensión, se decidirá si COLPENSIONES, está legalmente obligada a reconocer y pagar a la actora la pensión de vejez teniendo en cuenta el tiempo del título pensional o cálculo actuarial que se le condene a pagar al litisconsorte MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta corporación judicial para conocer de la apelación y de la consulta de la sentencia de primera instancia, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

6. CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007 además de resolverse la apelación de COLPENSIONES, se consultará la sentencia de primer grado en favor de esta última entidad por haberle resultado adversa, por lo que, la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Primeramente, se resolverá la consulta de la sentencia en favor de COLPENSIONES, que tiene que ver con la orden que se le dio de realizar el cálculo actuarial frente al periodo de omisión por parte del empleador MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA, desde el 13 de diciembre del 2004, hasta el ciclo de diciembre de 2008, ya que dicha condena lleva consigo consecuencias jurídicas, económicas y financieras en contra de COLPENSIONES, de manera que aun cuando el litisconsorte necesario por pasiva no apeló la condena que le fue impuesta al pago de aportes pensionales a favor de la demandante, por las razones antes indicadas se hace imperioso consultar esta decisión, en orden a lo que afecte a COLPENSIONES.

Posteriormente, se analizará el derecho que pueda asistirle a la demandante a la pensión de vejez deprecada y la indexación. Finalmente, se resolverá en apelación, el tema de la condena en costas impuestas a COLPENSIONES.

Esa así que el Art. 9 de la Ley 797 de 2003, que reformó el Art. 33 de la Ley 100 de 1993, permitió en su literal b) tener en cuenta para reconocer la pensión de vejez, no solo los tiempos efectivamente cotizados a las administradoras de pensiones, sino entre otros: *“El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador.”*

En razón a lo anterior, cualquier persona que pretenda le sea reconocida pensión de vejez, puede demandar a su empleador que omitió afiliarlo al sistema pensional para que este pague los aportes pensionales a través del título pensional con el cálculo actuarial que establece la referida norma legal, a efecto que este tiempo sea tenido en cuenta por las administraras de pensiones como semanas cotizadas para acceder a la citada prestación, por lo que como ya se dijo en precedencia como la condena al empleador al pago de los aportes pensionales trae consecuencias jurídicas, económicas y financieras a cargo de las administradoras de pensiones, en este caso de COLPENSIONES, se hace necesario consultar la sentencia a favor de esta entidad para establecer si el tiempo que se pretende tener en cuenta como semanas cotizadas con el empleador del que se aduce omisión de reportar las novedades y el pago de las mismas, fue por una relación laboral que haya existido realmente y que no se trate de un fraude o colusión para lograr obtener a cargo del fondo común de los afiliados a COLPENSIONES y del presupuesto general de la Nación, con el que subsidia parte de las pensiones, otorgadas y pagadas en el régimen pensional de prima media de las que el Estado es garante del pago.

Así entonces respecto de la orden que se le dio al señor MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA de pagar a favor de la demandante los aportes pensionales a través del cálculo actuarial por el periodo comprendido entre el 13 de diciembre del 2004, y diciembre de 2008, no halla la Sala indicios que se pueda tratar de un fraude o colusión tendiente a que la actora pueda acceder a la pensión de vejez a cargo de COLPENSIONES, primeramente porque en la demanda no se pretendía la declaratoria de relación laboral con este empleador con el fin que el mismo pagara dichos aportes pensionales, sino que fue el juzgado de instancia quien consideró necesaria la citación al litigio de esta parte procesal, para que explicara las razones por las cuales omitió realizar la cotización en el periodo denunciado por la accionante.

Ahora bien, en la contestación de la demanda, el señor MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA, acepta que sostuvo con la demandante una relación laboral, situación fue ratificada por este accionado en el interrogatorio de parte que fue decretado de oficio por el juez de instancia, quien confesó que la demandante prestó sus servicios de manera continua entre el año 2002 y el año 2017, no obstante, también manifestó que el motivo por el cual no aparece en la historia laboral de la actora el periodo entre diciembre del 2004, hasta el ciclo de diciembre de 2008, es porque en el año 2004 realizó un retiro del sistema de la demandante cuando ésta salió a vacaciones y al año siguiente, omitió reportar la respectiva novedad de continuidad en la relación laboral.

De otra parte, denota la Sala el esfuerzo probatorio que hizo la parte demandante y el señor MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA para acreditar la relación laboral, presentando incluso las autoliquidaciones de aportes a la seguridad social a subsistemas distintos al pensional entre el año 2004 y el año 2008, que dan cuenta efectiva de la relación laboral suscrita por las partes.

En ilación con lo anterior, a esta Sala no le queda duda que en efecto logró acreditarse la relación laboral entre la señora MARÍA NUBIA DEL SOCORRO ZAPATA MOLINA y MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA, entre el 13 de diciembre de 2004 y diciembre de 2008, pues los hechos presumidos que estableció el *a quo*, no se ven desvirtuados con la demás prueba obrante al plenario y por las razones ya indicadas, tampoco encuentra la Sala evidencias que se trate de un fraude o colusión.

En razón a los argumentos expuestos en precedencia, se CONFIRMARÁ la sentencia de primera instancia en cuanto condenó al señor MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA, a pagar las cotizaciones a favor de la actora mediante el aludido cálculo actuarial.

Conforme a lo dicho y encontrándose probada la existencia de las relación laboral de la demandante con al señor MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA, se pasa a estudiar con más amplitud lo referente a la posibilidad jurídica de tener en cuenta el tiempo laborado con este empleador sin afiliación al sistema pensional, para otorgarle la pensión de vejez a la demandante, con el pago del accionado del cálculo actuarial a que se le condenó a pagar en primera instancia.

De cara a lo anterior, es preciso tener en cuenta que la jurisprudencia de todas las altas cortes de nuestro país, es decir la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral y el Consejo de Estado, tiene establecido una clara y definida línea jurisprudencial según la cual, ante la falta de afiliación de un trabajador al sistema pensional por parte del empleador, bien sea por imposibilidad de hacerlo por falta de cobertura del ISS o por cualquier otra razón, es obligación del empleador, pagar los aportes pensionales que no canceló, por el procedimiento del cálculo actuarial.

La línea jurisprudencial antes mencionada ha sido construida inicialmente por la Corte Constitucional mediante en las sentencias T-719 de 2011, T-020 de 2012, T-651 y 770 de 2013 y T- 435 de 2014, T- 665 de 2015, T – 64 de 2018, SU- 226 de 2019, entre otras.

En la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, la tesis antes mencionada del deber de los empleadores de responder por las cotizaciones o aportes pensionales aún en los casos que no había cobertura del ISS o no había la obligación legal de cotizar, fue asumida en un principio con restricciones, pero posteriormente con más amplitud en la sentencia 32922 de 22 de julio de 2009 y la sentencia 35692 de 24 de enero de 2012 y sin restricciones de ninguna clase a partir de la Sentencia SL9856-2014, ratificada en las sentencias SL 18906-2017, SL3524-2018, SL4334-2019 entre muchas otras.

El Consejo de Estado también ha sostenido la tesis ya referida, entre otras en las sentencias 2006-02298 de octubre 24 de 2012, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "A", en la Sentencia 2006-00068 de marzo 11 de 2010, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, y en la Sentencia 2016-05641 de julio 19 de 2017, SECCIÓN CUARTA., entre otras.

DEL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN A CARGO DE COLPENSIONES:

En cuanto a la condena al reconocimiento de la pensión de vejez a cargo de COLPENSIONES, aspecto que se revisa en esta instancia en CONSULTA de la sentencia en favor de esta entidad, debe señalarse que el derecho que tenga la demandante a la prestación de vejez, debe analizarse con los requisitos legales del sistema general de pensiones consagrados en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la ley 797 de 2003, por no ser esta beneficiaria de la transición del Artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Aquella norma legal exige como requisitos para obtener la citada prestación, 57 años de edad en el caso de las mujeres y 1300 semanas cotizadas.

En este caso, la señora ZAPATA MOLINA, al haber nacido el 23 de noviembre de 1960, como se prueba con la copia de su cedula de ciudadanía que milita a folio 11 del plenario (Documento 01 del expediente digital), acredita que arribó a la edad mínima pensional de 57 años el mismo día y mes del año 2017.

Ahora, en cuanto al requisito de semanas cotizadas, encontramos que en la historia laboral más actualizada que reposa en el expediente administrativo y que data del 01 de octubre de 2018, registra un total de **1.192.29 semanas** cotizadas a COLPENSIONES, a las que se suman **205.68 semanas** que representan el cálculo actuarial que se le condenó a pagar al demandado MARCO ANTONIO ZULUAGA

RIVERA, para un total de **1.397,97 semanas** cotizadas hasta el ciclo de febrero de 2018, que registra su última cotización en la historia laboral.

En ese orden de ideas, la demandante acredita los requisitos para acceder a la pensión de vejez, bajo las condiciones del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la ley 797 de 2003.

Ahora, para analizar la partida inicial del derecho al disfrute de la pensión de vejez, es necesario tener en cuenta que la Ley 100 de 1993, consagra en el inciso 2º del artículo 31, que al Régimen de Prima Media con Prestación Definida le *“Serán aplicables las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en la citada ley.”*, de tal manera que como el derecho pensional de la actora le fue reconocido conforme al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la ley 797 de 2003, es por ello que le son aplicables las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte, a cargo de COLPENSIONES en lo que respecta a la causación y disfrute de la pensión, pues la citada Ley 100, no trajo disposición que regulara o modificara este aspecto y es de esta manera que el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, estipula literalmente que:

“La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo,” (Subrayado agregado)

En lo atinente a la desafiliación del sistema pensional, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, ha precisado que ella en principio se materializa reportado la novedad del retiro pensional, pero que no es esta la única forma de dar a conocer la intención de desafiliación para entrar a disfrutar de la citada prestación, pues ella se puede deducir de varios hechos, como lo son, peticionar el reconociendo de la pensión y cesar el pago de los aportes pensionales cuando ya se han cumplido los requisitos legales para tal fin, no obstante en el caso concreto, se acredita que la demandante realizó la última cotización al sistema para el ciclo de febrero de 2018, por lo que su pensión se causa a partir del día siguiente a la fecha de la última cotización al sistema, esto es, 01 de marzo de 2018, por lo que en este sentido se MODIFICA la sentencia de instancia, toda vez que el *a quo* ordenó el reconocimiento de la pensión de vejez, a partir del 23 de noviembre de 2017.

En lo referente a la excepción de prescripción propuesta por la demandada COLPENSIONES al dar contestación a la demanda, se advierte que dicho fenómeno jurídico no tuvo operancia, pues el retroactivo pensional en este caso se reconoce a partir del 01 de marzo de 2018 y la demanda fue presentada el 27 de abril de 2018, según sello de oficina judicial de folio 6, sin que alcanzara a transcurrir el término de prescripción de 3 años consagrado en los artículos 151 del CPTSS y 488 del CST.

Ahora, como el juez de instancia no cuantificó el valor del retroactivo pensional, procede el despacho a efectuar dicho cálculo, teniendo en cuenta el salario mínimo legal y 13 mesadas pensionales anuales, encontrando que COLPENSIONES adeuda a la demandante por concepto de retroactivo pensional de vejez entre el 01 de marzo de 2018 y el mes de enero de 2023, la suma de \$56'741.447, conforme se muestra en la siguiente tabla:

LIQUIDACIÓN RETROACTIVO PENSIONAL			
AÑO	SALARIO	NO. MESADAS	TOTAL
2018	\$ 781.242	11 mesadas	\$ 8.593.662
2019	\$ 828.116	13 mesadas	\$ 10.765.508
2020	\$ 877.803	13 mesadas	\$ 11.411.439
2021	\$ 908.526	13 mesadas	\$ 11.810.838
2022	\$ 1.000.000	13 mesadas	\$ 13.000.000
2023	\$ 1.160.000	1 mesada	\$ 1.160.000
TOTAL			\$ 56'741.447

En lo concerniente a la indexación de las mesadas pensionales de las que se condenó a pagar a COLPENSIONES, ella es procedente por razones de justicia y equidad, por cuanto con esta lo que se pretende es actualizar la depreciación monetaria causada por el retardado o inoportuno pago de las mesadas pensionales, lo que es justo en una economía inflacionaria como la nuestra, por lo que en este sentido se CONFIRMARÁ la sentencia recurrida.

Se precisa, que la indexación de las mesadas pensionales retroactivas se realizará conforme la siguiente fórmula:

$$VA = Vh \times \frac{\text{índice final}}{\text{Índice inicial}}$$

En la que VA (valor actualizado) es igual a la mesada pensional dejada de percibir por la demandante (Vh), multiplicada por el guarismo que resulta al dividir el índice final de

precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en el mes anterior al pago, por el índice inicial, vigente en el mes de causación de cada mesada.

Finalmente la Sala debe aclarar que la obligación de COLPENSIONES de pagar la pensión al demandante, conforme al mandato del Inciso 2 del literal e) del Numeral 2 del Art. 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el Art. 9 de la Ley 797 de 2003, y el Art. 17 del Decreto 1414 de 1997 (compilado en el Art. Artículo 2.2.4.4.6., del Decreto 1833 de 2016, surge, cuando COLPENSIONES haya recibido efectivamente el cálculo actuarial, a su satisfacción, por lo que se ADICIONARÁ la sentencia de primera instancia, por cuanto la juez no efectuó en la sentencia la prevención relativa a que COLPENSIONES deberá proceder al pago del retroactivo pensional y a continuar pagando las mesadas a la actora, solo cuando reciba efectivamente del señor MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA, el cálculo actuarial de los aportes pensionales anteriormente citados.

La demandante podrá hacer uso del proceso ejecutivo para lograr que el demandado MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA, pague a COLPENSIONES el importe del cálculo actuarial, si no lo paga oportunamente.

En este punto también es necesario indicar que si bien la apoderada de COLPENSIONES solicita en el recurso de alzada que se autorice a la entidad que el cálculo actuarial incluya los intereses moratorios, lo que no es procedente, pues el cálculo actuarial, es una prestación que para liquidarla, se utilizan procedimientos matemáticos muy distintos al simple pago de las cotizaciones, pues el Decreto que regula su liquidación establece que se liquida con la siguiente formula: “*Valor de la Reserva Actuarial = (Pensión de referencia x F1 + AF x F2) x F3*”, para lo que se toma en cuenta baremos como la edad en la que conforme la Ley se obtiene la pensión de vejez, un Salario de referencia para el cálculo que también está determinado por el Decreto el que establece que es el que el trabajador tendría a la edad de 57 años de edad si es mujer o 62 si es hombre, el que se obtiene de multiplicar el salario base de liquidación por el trabajador a 31 de marzo de 1994. Además, para liquidar el cálculo actuarial se toma en cuenta el capital necesario para financiar una pensión unitaria de vejez y de sobrevivientes a la edad utilizada para el cálculo del salario de referencia de la reserva actuarial, y el valor del auxilio funerario entre otros aspectos, por lo que el referido cálculo se actualiza al momento de su liquidación por lo que no genera intereses al menos si se paga dentro del término que se otorga para su cancelación y si no se paga el mismo debe ser reliquidado.

De otra parte, la sentencia de primera instancia será ADICIONADA en el sentido de disponer, que la demandante debe aportar del retroactivo pensional que se le pague, el porcentaje legal correspondiente de aporte al sistema de salud, conforme la jurisprudencia de la CSL de la H. Corte Suprema de Justicia (Sentencias SL1195 de 2014, SL16844 de 2015, SL 1064 de 2018 y SL 1169 de 2019 entre otras) y la Corte Constitucional (Sentencia SU-230 de 2015 entre otras), con destino a la EPS, a la que se encuentre afiliada la actora como cotizante o beneficiaria, para lo cual la requerirá al momento del pago del retroactivo pensional para que informe.

En cuanto a la inconformidad que presenta la apoderada de COLPENSIONES con respecto a la condena en costas, debemos remitirnos a la norma legal que a la fecha de la sentencia de primera instancia reglaba lo referente a la condena en costas, la cual es el Artículo 365 del CGP, norma que dispone lo siguiente:

“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

La apoderada COLPENSIONES aduce que en este caso no resultó vencida en juicio, toda vez que sus actuaciones estuvieron ceñidas a la ley, siendo el condenado MARCO ANTONIO el responsable de haber omitido la afiliación y pago de aportes al régimen pensional, por lo que no resulta procedente una condena en costas.

Analizados los anteriores argumentos, los mismos resultan de recibo por la Sala, en atención a que Colpensiones no tuvo ninguna responsabilidad en lo referente a la desafiliación de la actora del sistema pensional por su empleador MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA lo que generó la falta de pagar de las cotizaciones al sistema pensional, de manera que cuando negó la pretendida pensión de vejez a la demandante, lo hizo con fundamento en una norma legal, porque para ese momento no se acreditaban los requisitos necesarios para acceder a la pensión de vejez, derecho que solo vino a ser declarado mediante este proceso judicial, concluyéndose entonces que la convocatoria de dicha entidad al presente proceso es para que corra con las consecuencias de la falta de cotización de un empleador, situación en la que no participó, encontrado la Sala procedente la solicitud elevada en el sentido que dicha entidad no deba asumir costas procesales.

De acuerdo con lo anterior se **REVOCARÁ** la condena en costas que le fue impuesta a COLPENSIONES, quedando dicha condena únicamente a cargo del señor MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA, por haber resultado vencido en el juicio.

Finalmente, en lo que respecta a los pedidos la apoderada de la parte demandante en alegatos referidas a que se conceda la pensión a la actora sin pago del cálculo actuarial por existir una mora en el pago de las cotizaciones, y el reconociendo de intereses moratorios, tales asuntos no serán decididos, pues, en la Audiencia de Juzgamiento el apoderado de la accionante manifestó estar conforme con la decisión que incluía la absolución de intereses moratorios, sin presentar recurso alguno, por lo que no puede en los alegatos traer asuntos que no fueron objeto de la apelación.

Aunado a lo anterior, observa la Sala que en general el escrito de alegatos presenta varias inconsistencias, porque hace alusión a la apelación que presentó la “COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA”, entidad que no hace parte del proceso. Adicionalmente, menciona que el *a quo* ordenó el reconocimiento de la pensión de vejez con fundamento en el régimen de transición, cuando lo cierto es que ni en la demanda fue solicitada la prestación con fundamento en dicha preceptiva, ni la sentencia objeto de recurso ordenó el reconocimiento de la pensión bajo el amparo de la transición.

Sin costas en esta instancia por haber resultado próspero parcialmente el recurso de apelación interpuesto por COLPENSIONES.

7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, fechada el 22 de octubre de 2020, en el presente proceso promovido por la señora **MARÍA NUBIA DEL SOCORRO ZAPATA MOLINA**, contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** y el litisconsorte necesario por pasiva el señor **MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA** en cuanto condenó a éste último a pagar el cálculo actuarial y a COLPENSIONES a reconocer y pagar pensión de vejez.

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia de primera instancia, en el sentido de DECLARAR que la obligación de COLPENSIONES de pagar la pensión y su indexación, que se le condenó a favor de la demandante, sólo surge cuando haya recibido efectivamente el importe del cálculo actuarial que se condenó a pagar el litisconsorte necesario por pasiva el señor **MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA**.

La demandante podrá hacer uso del proceso ejecutivo para lograr que el demandado MARCO ANTONIO ZULUAGA RIVERA, pague a COLPENSIONES el importe del cálculo actuarial, si no lo paga oportunamente.

TERCERO: MODIFICAR la sentencia de primera instancia, en el sentido que el disfrute de la pensión de vejez que se ordena pagar a COLPENSIONES, procede desde el 01 de marzo de 2018, liquidando por concepto de retroactivo pensional entre esta fecha y el 31 de enero de 2023, la suma de **\$56'741.447**, conforme al cuadro de la pare motiva de este fallo.

CUARTO: ADICIONAR la sentencia de primera instancia en el sentido de ORDENAR a COLPENSIONES, que del retroactivo pensional que le pague a la demandante, descuenta el porcentaje legal correspondiente del aporte al sistema de salud, el que deberá poner **de inmediato** a disposición de la EPS, a la que se encuentre afiliada la actora como cotizante o beneficiaria, para lo cual la requerirá al momento del pago del retroactivo pensional para que lo informe.

QUINTO: REVOCAR la condena en COSTAS proferida en primera instancia en contra de COLPENSIONES, para en su lugar absolverla de tal obligación.

En lo demás se confirma la sentencia apelada y consultada.

Sin condena en costas en esta instancia.

La presente sentencia se notifica a las partes por **EDICTO**.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma por quienes en ella han intervenido.

Los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c15c007914323504bd877b8b5b3ae8577b58456941f468fade7fb72e41a7c19b**

Documento generado en 23/02/2023 02:32:45 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>